

Capítulo 2

“Una guerra que no se la deseo a nadie”. Contextualización histórica de la violencia en el Urabá (1994-2016)*

DOI: <https://doi.org/10.25062/9786287602441.02>

Jaime Cimadevilla Acevedo

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Resumen: El presente capítulo expone el desarrollo del conflicto armado en la región del Urabá desde un análisis histórico que explica el actuar de varios grupos armados en ese territorio y el impacto que tuvieron sobre las comunidades y el medio ambiente. Así pues, esto deriva en un aporte para la memoria histórica relacionada con la violencia tanto política como criminal exhibida en los años noventa del siglo XX. Para el desenvolvimiento teórico del presente trabajo, se recurrió a un análisis mixto (cuantitativo y cualitativo) que expone la evolución de la violencia y la afectación tanto territorial como humana. A modo de metodología se optó por la de tipo deductivo, la cual inicia con las generalidades (en este caso, del conflicto armado) hasta lo particular (que, dado el tema, es la guerra por los recursos extractivistas y el control territorial).

Palabras clave: guerras híbridas, memoria histórica, grupos armados organizados (GAO), historia.

* Capítulo de libro que presenta los resultados del proyecto de investigación “Orígenes de la violencia estructural contra el medio ambiente en la región del Urabá desde los años 1994 hasta el año 2016, como forma de lucha de las organizaciones al margen de la ley: surgimiento de economías ilegales que deterioran e impiden la reconstrucción del tejido social en la región”, del grupo de investigación Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia, de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” reconocido y categorizado en A por MinCiencias con el código COL0141423. Los puntos de vista pertenecen al autor y no reflejan los de la institución participante.

Jaime Cimadevilla Acevedo

Magíster, Relaciones Internacionales, Universidad de Nottingham, Reino Unido. Historiador, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. <https://orcid.org/0000-0002-3757-7562>

Citación APA: Cimadevilla Acevedo, J. (2023). "Una guerra que no se la deseo a nadie". Contextualización histórica de la violencia en el Urabá (1994-2016). En W. Farfán Moreno & P. J. Moreno Corzo (Eds.), *Medio ambiente y conflicto armado en la región del Urabá* (pp. 51-84). Sello Editorial ESDEG.
<https://doi.org/10.25062/9786287602441.02>

MEDIO AMBIENTE Y CONFLICTO ARMADO EN LA REGIÓN DEL URABÁ

ISBN impreso: 978-628-7602-43-4

ISBN digital: 978-628-7602-44-1

DOI: <https://doi.org/10.25062/9786287602441>

Colección Derechos Humanos y DICA

Sello Editorial ESDEG

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes prieto"

Bogotá D.C., Colombia

2023



Introducción

Durante la década de 1990, las cifras presentadas por varios informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2012; 2017) y de la Comisión de la Verdad (2022a) sobre homicidios, desplazamiento forzado, secuestros, masacres y violaciones a la integridad sexual —por nombrar algunos— aumentaron de forma alarmante en varias zonas del territorio nacional. En otras palabras, fueron los actos más destructivos para la población civil colombiana —tomas a poblaciones, masacres, desplazamiento forzado y homicidios— en su historia reciente. Entre las regiones más azotadas se encuentra la región del Urabá. ¿Por qué varios grupos armados han tenido interés en esta zona del país? ¿Qué llevó a un aumento estrepitoso de los hechos victimizantes en el Urabá a principios de los años noventa del siglo XX? ¿Por qué la región del Urabá ha sido uno de los principales corredores históricos de la violencia en Colombia? La guerra en el Urabá se ha enfocado en el control del territorio para la explotación extractivista de sus riquezas naturales, el cultivo ilícito de coca; su posición geoestratégica, entre dos océanos, y una débil frontera internacional lo hacen un lugar de alto interés para diversos grupos armados que buscan financiar sus músculos militares y políticos. Así mismo, al ser una región tradicionalmente excluida por el Estado colombiano, resulta ser un “santuario” ideal para que dichas organizaciones se reagrupen o diseñen nuevas operaciones. Finalmente, varios de los grupos armados han mutado y cambiado sus prioridades para poder sobrevivir y adaptarse a los escenarios de postacuerdo y desmovilizaciones, y han seguido con sus negocios ilícitos, que plagan a la región del Urabá.

Para comprender las complejas dinámicas y situaciones que ocurrieron entre 1994 y 2016 en la región del Urabá, se indagaron los aportes de la *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia* (2015), de la Comisión Histórica

del Conflicto y sus Víctimas (CHCV). Este documento, que reunió a distintos investigadores y expertos sobre el conflicto armado colombiano, brindó distintas ópticas teóricas y metodológicas para comprender este largo y sufrido fenómeno. Entre los grandes aportes estuvo la inclusión de un estudio *multidimensional y multidinámico* que permite comprender de manera general y amplia las distintas problemáticas políticas, sociales y económicas que han mantenido a Colombia dentro de una densa espiral de violencia. Por eso, un análisis reflexivo, de carácter multidimensional y multinivel de la historia reciente de esa zona puede desentrañar los distintos fenómenos, los actores y los sucesos que han impactado a las diversas poblaciones y a la fauna y la flora que reinan sobre la tierra urabeña. Por lo tanto, el principal motivo detrás de esto es comprender a los distintos actores armados que ingresaron a la región buscando controlar el territorio: algunos de dichos grupos quieren preservar el dominio tanto económico como político, mientras que otras estructuras (como los carteles internacionales) buscan controlar el portafolio criminal: el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de migrantes y otras economías ilícitas que afectan la vida cotidiana de las comunidades y la preservación del ambiente natural.

La reconstrucción y la comprensión de cada suceso y cada proceso es uno de los principales desafíos que enfrenta un científico social. Por ello, es necesario analizar las fuentes primarias de algunos de los principales actores en las hostilidades (como planes de guerra, conferencias y otros documentos), para comprender el desenvolvimiento del conflicto. Además, hay otro desafío que es necesario contemplar: el conflicto armado colombiano es de carácter interno, con algunos impactos internacionales, y cuyos principales actores van desde movimientos guerrilleros de diversos espectros ideológicos hasta ejércitos privados financiados por el narcotráfico e intereses privados. Estas características se acercan a guerras de tipo *irregular o asimétrico*, debido a la pluralidad de grupos armados, pero que no cuentan con las capacidades bélicas del Estado, el cual dispone de estructuras militares capacitadas para desarrollar operaciones terrestres, aéreas, marítimas y fluviales a mayor escala. Al ser un conflicto de esas grandes características, la población civil colombiana resultó impactada e involucrada en las violentas confrontaciones entre los diversos grupos armados que buscaban controlar el territorio a toda costa.

Justamente, se estaba desarrollando el concepto *nuevas guerras* para explicar los fenómenos de violencia que estaban ocurriendo en la década de 1990. Este concepto puede adaptarse al contexto del conflicto colombiano, ya pues tiene

componentes que comparten el enfoque teórico de las nuevas guerras, que se inició con Mary Kaldor (2013) y Herfried Münkler (2005), y el de fenómenos bélicos posteriores a la Guerra Fría, como lo fueron la guerra civil en Ruanda (1990-1994) y los violentos conflictos que acontecieron en la región de los Balcanes tras la desintegración de la República Federativa Socialista de Yugoslavia (1991-2001). Primero que todo, el conflicto en Colombia es una guerra de tipo irregular y asimétrico, debido a la gran cantidad de grupos armados de distinta procedencia ideológica y de intereses particulares que se enfrentan militarmente por el control del territorio colombiano. Evidentemente, Herfried Münkler y Mary Kaldor se enfocaron en los conflictos armados que ocurrieron en la República de Yugoslavia y algunos países africanos, los cuales tienen características particulares o singulares que ayudan a entender esos contextos bélicos. Sin embargo, los principios generales de estos autores han sido empleados por un buen número de estudiosos del caso colombiano, ya que sus bases teóricas son ventajosas para comprender la evolución de los grupos armados, las nuevas luchas por el control del territorio —que se desarrollan, generalmente, a escala interestatal—, la injerencia de mercados criminales y los episodios de violencia a inicios del siglo XXI en Colombia (Vásquez, 2008; Pizarro, 2018; Cimadevilla, 2019; Wlaschütz, 2004).

Al estudiar los argumentos principales de varios autores que han trabajado el mencionado concepto, es posible inferir tres grandes principios que caracterizan este fenómeno: 1) guerra asimétrica, 2) uso de economías ilegales y 3) pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado. El primero se caracteriza por la abundante presencia de varios actores armados que participan en la confrontación, pero sin alcanzar el poderío militar de las FF. AA. del Estado. En el caso colombiano, la guerra asimétrica se ve reflejada en la cantidad de movimientos guerrilleros, ejércitos privados, autodefensas o grupos criminales que se han enfrentado ya sea contra el Estado o entre ellos mismos. En cuanto al segundo, el recurrente uso de mercados ilegales permite “privatizar” un negocio generador de grandes riquezas para sostener y financiar los músculos políticos y militares, ya sea de un grupo armado o de una organización criminal (Bauer, 2014). Ejemplos notorios han ocurrido en la República Democrática del Congo o en Sierra Leona, mediante la explotación de los infames *diamantes de sangre* y otros apetecidos minerales que eran vendidos a clientes alrededor del mundo, y cuyas regalías se direccionaban, principalmente, a la compra de armamento y de equipos militares, y al mantenimiento del pie de fuerza (Orogun, 2004; Le Billon, 2008). En el caso de Colombia, el narcotráfico y la minería ilegal (dos fenómenos que se abordarán más adelante) han

sido empleados por una multiplicidad de actores para saciar sus necesidades y disfrutar sus beneficios en los planos tanto económico como militar. Finalmente, la pérdida del monopolio de la fuerza se debe a que las mencionadas organizaciones armadas son capaces de controlar el territorio y gobernarlo al expulsar o mantener al margen a las instituciones del Estado o infiltrarse dentro de ellas.

De la manera descrita, podría explicarse el actuar de varios actores armados a lo largo de los años por medio de preguntas como: *¿Cuáles fueron las motivaciones para que grupos políticos que tomaron la vía de las armas recurrieran a mercados ilegales?* El concepto *mutación* explica cómo estos grupos armados, igual que si se tratase de un organismo viviente, logran cambiar, adaptarse y perseverar a lo largo del tiempo (Faivre & D’Arcie, 2005; Garzón Vergara, 2015; Niño González, 2017). En efecto, algunos de los más poderosos grupos armados guerrilleros y de autodefensa sobrevivieron o se fortalecieron significativamente gracias al ingreso a mercados ilegales, lo que puede explicar, en parte, su prolongación en el tiempo y su impacto transgeneracional. Es así como nos aproximamos al concepto que ha sido empleado por el Ejército Nacional de Colombia (EJC) en la Doctrina Damasco (2016), y por varios autores (Bautista, 2018; Londoño, 2019), para explicar el cambio constante de estos grupos en un periodo de 50 años en Colombia: las *guerras híbridas* (Hoffman, 2007; Fleming, 2011) se basan en una combinación de factores políticos, económicos y sociales, donde los objetivos ideológicos de las organizaciones armadas se combinan con características del crimen organizado, sea nacional o transnacional. Por ello, la complejidad del conflicto armado puede entenderse como una densa historia, compuesta por varios actores armados, políticos o privados, que han sobrevivido a lo largo de los años por emplear mercados ilegales cercanos al crimen organizado; también, por la inadecuada presencia de las instituciones del Estado en áreas donde históricamente se ha disputado el control del territorio.

Ciertamente, el estudio de los diversos tipos de violencias que se han producido en el Urabá se ha hecho analizando e investigando desde diferentes perspectivas multidisciplinarias, desde hace décadas. Uno de los aportes que se hacen en este capítulo cubre dos motivos esenciales. El primero es ubicar históricamente al lector sobre las disputas sociopolíticas de esta región del país, y cómo eso ha desembocado en la lucha por el control del territorio, que, desafortunadamente, ha afectado tanto a las comunidades locales como al medio ambiente nativo que mantiene el flujo natural de esa zona del país. De esa manera, esta primera sección histórica y contextual facilitan la temporalidad y la contextualización de los

siguientes capítulos desarrollados en este acumulado investigativo. El segundo aporte es el análisis y el uso de fuentes primarias de algunas de las organizaciones armadas, para así comprender su actuar desde sus grandes planes estratégicos, como las Conferencias de las FARC-EP y los Congresos del ELN. Así mismo, serán tenidas en cuenta las fuentes de las FF. MM., como algunos de sus planes o sus documentos, para así tener una vista panorámica amplia de la mayoría de las facciones que participaron en las confrontaciones armadas a lo largo de los años comprendidos en el estudio. Por eso, es importante abordar las fuentes primarias que se tienen de los distintos grupos armados, como son las conferencias guerrilleras, el compendio de documentos bautizado *Génesis* (FARC, 2018), y planes de las FF. MM., por nombrar algunos, que permitan dar explicaciones sobre quienes operaron y actúan en la región, o que tuvieron alguna incidencia o interés en expandir su control territorial a esas zonas del país.

También, hay que introducir el concepto *redes locales*; es decir, las formas como se entienden y se administran en el día a día las comunidades originarias y nativas de la región con actores externos que han impactado positiva o negativamente sus *modus vivendi*. Esto ha ocurrido porque los principales medios para la generación de riquezas de la región han sido la explotación de la tierra y la extracción de varios productos que son buscados tanto en los mercados legales como en los ilegales: Desde los años sesenta del siglo XX, el cultivo de banano, el emprendimiento de campesinos que colonizaron parte de esa zona por la minería y la llegada de empresarios produjeron un éxodo hacia el Urabá (Bejarano, 1988; Carreño, 2011). Sin embargo, esto ha confluído desde algunas siembras ilícitas hasta la actual minería industrializada ilegal. En palabras de Javier Revelo Rebolledo y Mauricio García Villegas (2018), “la coca y la minería del oro son los motores de la disputa” (p. 39) en algunos municipios del Urabá. Así mismo, las redes locales tienen la capacidad para determinar el poder “real” del territorio, mientras que el Estado representa el poder “formal”, debido a que su alcance no es tan directo como el que asume el rol de tomador de decisiones en un lugar específico. Y es que la vida en sociedad conserva distintos aspectos sociales, políticos, culturales, económicos que determinan una organización colectiva en un territorio.

Por lo tanto, una alteración a ese orden hegemónico, a ese poder real emanado históricamente de esa colectividad, puede producir fuertes enfrentamientos entre distintos grupos, bien sea por medios políticos o militares. No es raro, entonces, que dicha estrategia la planteara posteriormente Bernardo Jaramillo, candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP), cuando explicó que un alcalde era

más importante para el partido (poder real) que volverse el partido de gobierno (poder formal), pues las acciones concretas y directas ocurren en el primer nivel (Harnecker, 1989). Por lo tanto, esa disputa buscaba imponer un tomador de decisiones en la región que fuera capaz de controlar el territorio y, por consiguiente, las riquezas extraíbles de la tierra.

Además, cabe recordar que el territorio era previamente habitado por comunidades nativas como los kunas, los emberá y los senú, más comunidades afro que habían ocupado la región tras los anteriores procesos de colonización del desaparecido imperio español. Por lo tanto, las nuevas expansiones podrían construir nuevas relaciones con esas comunidades o, en el peor de los casos, escalar las tensiones por los recursos y sus territorios ancestrales. También hay que mencionar las comunidades afrodescendientes de esta región, las cuales han ocupado parte del Darién y el Urabá para el desarrollo económico de la pesca y de distintos tipos de cultivos. Así pues, esta área tiene implícita una increíble pluralidad étnica que ha tenido que convivir y entenderse para evitar disputas territoriales. Sin embargo, como se mencionará a continuación, aquellos procesos pacíficos se verían seriamente tensionados con el arribo de GAO con intereses políticos y económicos en la región.

El Urabá: un área de disputa

Enclavada entre dos océanos, el Urabá se destaca por ser la única zona en toda Sudamérica que cuenta con las propiedades geográficas de tener dos entradas oceánicas. Su situación geográfica le da particularidades climatológicas, pero, además, para los intereses de distintos grupos sociales, económicos o políticos, es apetecida, por su posición geoestratégica en su área continental. Esta ventaja geopolítica es de suma importancia para el desarrollo económico de Colombia, al conectar por vía terrestre ambos océanos. La región se encuentra entre los departamentos de Antioquia y Chocó, donde se divide admirativamente en los municipios de Arboletes, Dabeiba, Necoclí, San Juan de Urabá, Turbo, Acandí, El Carmen del Darién, Unguía y Riosucio, que, en conjunto, suman aproximadamente 11.664 km², donde nacen bosques tropicales, manglares, zonas montañosas, pantanos y ríos que son difíciles de atravesar. Irónicamente, sus tan apetecidas fuentes hídricas —en especial, sus ríos— tienden a cambiar su flujo, situación que altera de manera significativa el paisaje y las formas como se puede interactuar con este. Así mismo, sus bahías se invisten de una complejidad geográfica que ha significado

un reto para cualquier navío, ante sus cambiantes sedimentos arenosos (Bernal et al., 2005).

Para marzo de 2019, se habían registrado 508.802 habitantes comprendidos en el territorio anteriormente nombrado (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). Es decir, las comunidades o los pueblos se encuentran dispersos o distan de manera considerable entre sí. Igualmente, sus cualidades climatológicas pueden ser extremas para muchos colonos y habitantes, obligados a enfrentar diversas enfermedades tropicales potencialmente mortales, como el tétano, la disentería, el paludismo e, incluso, la leishmaniosis (Carrillo-Bonilla et al., 2014). Por tal motivo, los intentos por habitar o colonizar masivamente dicho territorio han sido irregulares y poco fructíferos desde los tiempos de la colonización española.

Por lo planteado, esta complejidad geográfica y la falta de una eficaz presencia del Estado ha traído serios problemas estructurales a los habitantes de la zona. Es decir, la exclusión institucional por parte del Estado colombiano ha sido palmaria en el territorio y, desafortunadamente, ello hizo que los problemas sociales, económicos y políticos no se hayan resuelto de manera diplomática ni con la adecuada regulación estatal. Además, la región del Urabá es una de las más azotadas por la pobreza y por la carencia de una efectiva intervención estatal que solucione las necesidades básicas de la mayoría de sus habitantes. Por eso, no es de extrañarse que sea una de las regiones con los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad del país, al no contar con la presencia eficaz del Estado (Pérez, 2007, p. 2), especialmente en los municipios de Apartadó y Mutatá (Departamento Nacional de Planeación, 2016, p. 64).

Infortunadamente, esta rica región de Colombia ha sido azotada por distintos tipos de violencia desde inicios del siglo XX hasta la fecha. Es decir, la violencia se ha presentado desde disputas territoriales entre ricos colonos, el campesinado y las comunidades indígenas, y pasado de los conflictos bipartidistas a las guerras por el control del territorio por parte de las guerrillas de corte comunista y los ejércitos privados del narcotráfico. Por ello, cabe preguntarse: *¿Por qué el área del Urabá ha tenido históricamente varios episodios de violencia? ¿Qué ha generado ese interés por esta área alejada de los principales centros urbanos del país?* A continuación se expondrán unas condiciones tanto económicas (estructurales) como políticas, que derivaron en la larga historia de violencia que persiste en esa región. Esta combinación de factores tiene la frontera con el vecino país de Panamá abiertamente a merced de organizaciones criminales, que han utilizado la región como una de las grandes rutas del narcotráfico, tráfico de especies nativas y de minerales, por su

doble salida oceánica y porque permite el ingreso de otro tipo de mercados ilícitos, como armas y contrabando de otros países del mundo entero. Cabe mencionar que ya desde el siglo XIX el contrabando era una práctica tradicional de la región y, por lo tanto, su experiencia ancestral no resultaría extraña para futuros mercados ilegales. Por eso, es inevitable llegar a la siguiente afirmación: definitivamente, las fronteras son áreas de conflicto de tipo tanto regular (entre Estados) como irregular; en el caso colombiano, todas sus áreas fronterizas son lugares de conflicto: Arauca, el Catatumbo, el Urabá, Putumayo, Nariño, Cauca y La Guajira siguen siendo un gigantesco problema para la seguridad nacional, ante la alta presencia de grupos armados y organizaciones criminales que siguen luchando abiertamente por el control de esas rutas entre distintos países. Infortunadamente, esta rica región de Colombia ha sido azotada por distintos tipos de violencia desde inicios del siglo XX hasta la fecha.

Las diferencias políticas pasaron a transformarse en odios radicales, cosa que para algunos colombianos solo se resolvía por medios violentos. Además, las diferencias políticas entre las élites liberales y las conservadoras volvieron a surgir en todo el país, hasta llegar, incluso, al lamentable punto de desencadenar actos de violencia entre partidarios de alguno de los dos partidos, como la masacre de Gachetá del 8 de enero de 1939, donde murieron varios admiradores del Partido Conservador, o la formación de grupos de asesinos, como los llamados 'Pájaros' y los 'Chulavitas', con el objetivo de acabar con la vida de destacados integrantes o fervientes seguidores del Partido Liberal Colombiano. Estas tensiones iban lentamente escalando por todo el territorio nacional, hasta que llegaron a su tope y explotaron con el infame asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, líder del Partido Liberal, el 9 de abril de 1948. Este hito histórico representó el inicio de La Violencia, cuando se fundaron movimientos guerrilleros liberales para protegerse de los conservadores o atacarlos a estos y a la Fuerza Pública (militares y Policía Nacional), ya que, dentro de una visión política partidista, obedecían directamente las órdenes de los presidentes de la época: Mariano Ospina Pérez (1946-1950), Laureano Gómez Castro (1950-1951) y Roberto Urdaneta Arbeláez, designado de este último; y todos ellos, conservadores.

Para octubre de 1949, se conformaron las Guerrillas Liberales de Urrao (municipio de Urabá), bajo el mando de Juan de Jesús Franco, de quien se escribe que fue un legendario combatiente que firmaba con el título de Comandante Mayor de las Fuerzas Revolucionarias del Suroeste y el Occidente de Antioquia (FARC, 2018). Franco estaba motivado por deseos de justicia y libertad de pensamiento,

las cuales veía amenazadas ante la persecución genocida contra los militantes del Partido Liberal. Su grupo constituyó el primer asentamiento guerrillero establecido en la región de Urabá (Celis Arroyave, 2009). Eso bien podría explicar por qué varios de los movimientos guerrilleros posteriores lograron acomodarse a una región que ya había tenido una experiencia con estructuras armadas de ese tipo. Por tal motivo, el Partido Comunista Colombiano (PCC) buscó incorporar su tendencia ideológica en la región, pues veía que las lamentables condiciones económicas y políticas en el Urabá podrían ser adecuadas para instaurar células políticas entre sus habitantes. Sin embargo, fue una facción diferente del PCC la que logró establecerse en la región: el Partido Comunista Colombiano-Marxista Leninista (PCC-ML), cuya interpretación del comunismo se acercaba más a las enseñanzas de Mao Tse-Tung (fundador del Partido Comunista de China y primer dirigente de la República Popular de China), y se distanciaba, pues, de las visiones de la Unión Soviética, país de donde emanaban las órdenes del PCC. Así, el comunismo pudo asentarse y trabajar directamente con las comunidades, situación que se prestó para la formación de organizaciones campesinas guiadas bajo los principios del marxismo-leninismo.

Para los años sesenta del siglo XX se generó la gran bonanza bananera de Urabá, donde los cultivos de esta fruta prosperaron y varias embarcaciones sacaban el banano para ser comercializado. Como ya se mencionó, el cultivo de plátano y la disponibilidad de tierras para cultivo les significaron a muchos campesinos, colonos y empresas privadas la esperanza de surgir económicamente. De nuevo tomando en cuenta el tema del poder real, los procesos de colonización sin mucha presencia del Estado pueden generar tensiones entre distintos grupos sociales, étnicos o políticos por el control del territorio. Justamente, la Frutera de Sevilla, que era una filial de la United Fruit Company (vinculada a los hechos de la conocida como la Masacre de las Bananeras, en Ciénaga, Magdalena, en 1928), se instaló en esta región y fue un actor decisivo para que las relaciones entre patrones y trabajadores empeorara. Estas tensiones se evidenciaron principalmente en los trabajadores de las empresas bananeras, ya que vivían en situación de explotación y en paupérrimas condiciones de vida. Seguidamente, las colonizaciones de la tierra también derivaron en la concentración de tierras por parte de poderosos empresarios, e incluso, de multinacionales, lo que provocó uno de los grandes problemas del conflicto armado: la ineficiente distribución de la tierra y las problemáticas socioeconómicas que se mantienen sin una eficaz reforma agraria o política de tierras equitativa (Guhl, 1992).

En consecuencia con lo anterior, los conflictos obrero-patronales (Mazzoldi et al., 2019, p. 21) por las tierras o por el mejoramiento de las condiciones de vida y laborales para los campesinos, condujeron a tensiones socioeconómicas y a fuertes desacuerdos entre ambos sectores sociales, debido, en gran parte, a una adquisición irregular de la tierra. Fue entonces cuando el PCC-ML se instaló muy bien entre las masas campesinas, por sus discursos, que apoyaban a movimientos agrarios y rechazaban a los grandes latifundios sobre la tierra. Por cierto, y siguiendo la tradición de los movimientos guerrilleros liberales y el triunfo de la Revolución cubana, se fomentaron los primeros grupos de afinidad marxista-leninista que emplearían las armas, bien fuera para la defensa, o bien, para la toma del poder. Justamente, del PCC-ML que se instaló en Urabá, nació el EPL, en 1965. Este fue el encargado de actuar como brazo armado del partido político y de diseñar los plenos, o reuniones para determinar las direcciones ideológicas y militares relacionadas con el mismo. Precisamente, ya en esa época surgieron el ELN y las FARC-EP, lo que significó el inicio de un nuevo periodo de violencia en el conflicto armado, tras la desmovilización de grupos guerrilleros liberales en todo el país y la parsimoniosa desaparición de los 'Chulavitas' y los 'Pájaros', cuyo propósito político no reconocían los líderes del partido.

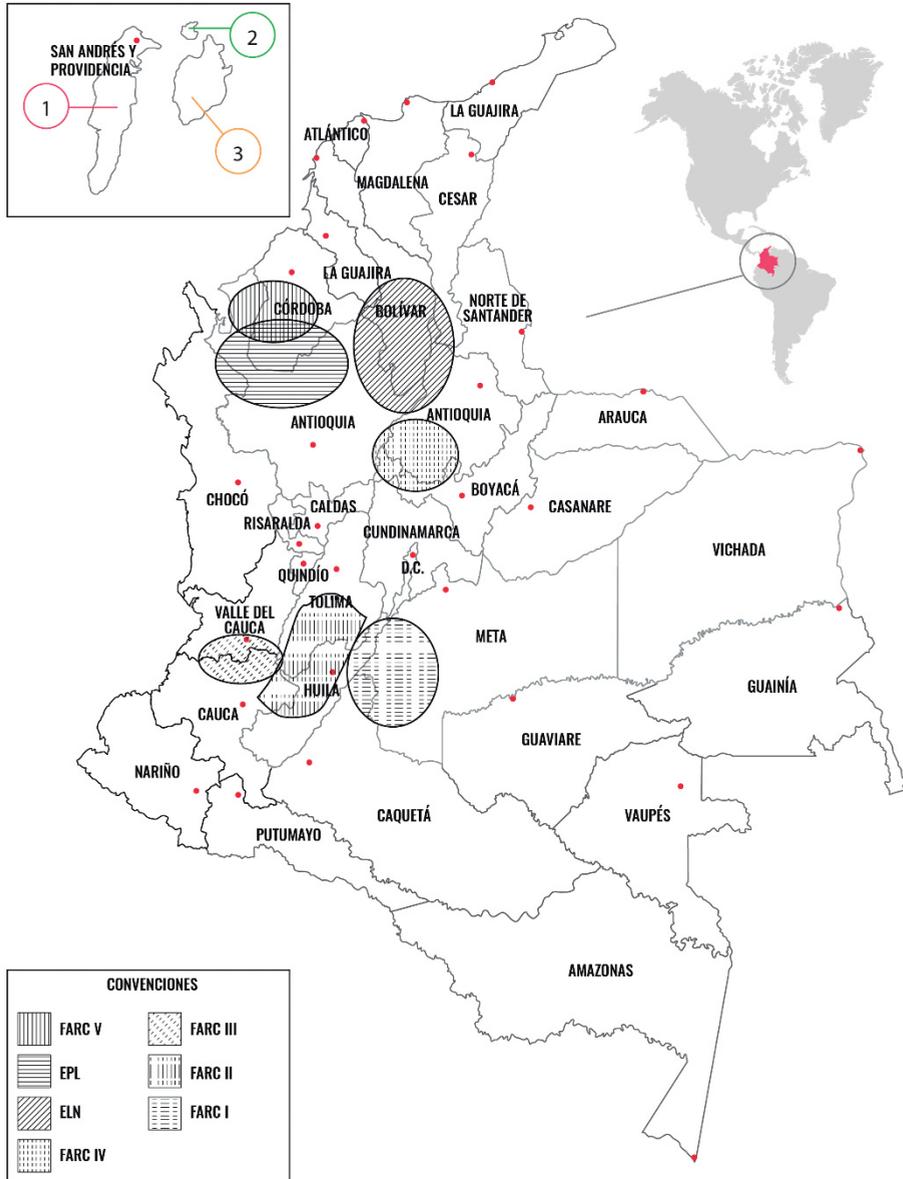
Ahora bien, las FF. MM. propinaron duros golpes a la guerrilla de corte maoísta a finales de los años sesenta y mediados de los años setenta del siglo XX: los comandantes Pedro Vásquez Rendón, Librado Mora Toro y Pedro León Arboleda murieron en medio de operaciones en contra de las FARC. A pesar de que muchos de sus líderes cayeron en combate y varios de sus militantes fueron capturados, la estructura guerrillera logró mantenerse y se reestructuró en la década de 1980. Ante esto, cabe preguntarse por qué, después de todo, el EPL no fue vencido en esta región. Es necesario retomar el argumento del abandono de la frontera colombo-panameña, factor al que han recurrido varios movimientos armados en Colombia, como las guerrillas liberales, durante los tiempos de La Violencia, y el EPL, hacia las décadas de 1960 y 1970. Este santuario geopolítico o "refugio" (Uribe de Hincapié, 1992, p. 235) les permitió tanto a las guerrillas liberales del decenio de 1950 como al mismo EPL ubicar un tipo de retaguardia estratégica en un área donde el control militar e institucional no alcanzaba a establecerse. Es así como las fronteras que se encuentran distanciadas de los principales centros urbanos permiten la supervivencia del grupo. Justamente, las investigaciones de Buhaug et al. (2009) comprobaron que tres de los principales factores para que un grupo armado sobreviva y perdure en el tiempo es su proximidad a las fronteras, evitar grandes ataques (por su debilidad militar) y estar alejado de las grandes ciudades.

Además, al tratarse de una guerra irregular, los enfrentamientos se limitaban a emboscadas; una situación donde el desgaste es menor que el propio de una batalla campal y, en consecuencia, hace que, en parte, el conflicto se alargue en el tiempo. Por cierto, ubicarse cerca de la frontera les permitía a dichas organizaciones escaparse con facilidad e impedía a las FF. MM. Perseguirlas, ya que la jurisdicción estatal se terminaba y una posible incursión en territorio internacional podría desembocar en una condena para el Estado colombiano si se hubiese propuesto una persecución transfronteriza. Finalmente, cabe mencionar que, durante la Cuarta Conferencia Guerrillera de las FARC-EP, celebrada en 1971, se determinó la región del Urabá como un área sustancial para el desarrollo de trabajo político-militar, lo que llevó a la fundación del V Frente, situación que, a su vez, significaría una pérdida parcial del monopolio sobre el área y de la influencia político-militar en la región, aunque su hegemonía territorial se mantenía por su conocimiento de la tierra y de la población, y por su histórica presencia.

Ante el crecimiento de los grupos armados y la necesidad de planear hacia el futuro, el EJC desarrolló un estudio que bautizó como el Plan de Desarrollo del Ejército 1973-1980. Este documento es un trabajo con tintes prospectivistas, y que estudiaba el ambiente económico, social y político de Colombia, con el objetivo de comprender y darles una lista de posibles alternativas y soluciones a las problemáticas tanto estructurales como militares que afectaban interna y externamente a Colombia. Para los años setenta del siglo XX, las tres principales guerrillas de la generación de la Guerra Fría se habían asentado y encontrado sus áreas estratégicas para trabajar sobre las poblaciones y construir sus campamentos, desde donde mantendrían al margen el avance del Estado colombiano o el de cualquier operativo militar en su contra.

En el mapa de la figura 1 se puede apreciar la ubicación de los distintos grupos guerrilleros y los cinco frentes que ya tenían las FARC-EP para ese momento. Así mismo, el EJC había examinado tanto la línea ideológica como el posible número de integrantes de cada movimiento guerrillero: las FARC-EP contaban con 300 hombres, que seguían la línea de la Unión Soviética. Por otra parte, el ELN contaba con 170 hombres y se afiliaban a la Cuba revolucionaria. Por último, el EPL contaba con 30 hombres, que seguían los principios de Mao Tse-Tung y las nociones del Partido Comunista de la República Popular de China. Como se puede apreciar en el mapa de la figura 1, el V Frente de las FARC-EP ya habían ingresado en un área tradicional del EPL, y el ELN no estaba muy alejado de ahí, ya que, históricamente, su presencia se ha sentido en el oriente antioqueño.

Figura 1. La amenaza interior. El enemigo



Fuente: Plan de Desarrollo del Ejército 1973-1980, p 27, folio 31. Archivo del Ministerio de Defensa.
Recreado por el autor.

Como ya se había mencionado, este plan resulta particular porque, de forma genuina, analizó históricamente la situación del país desde inicios del siglo XX, para determinar las tendencias a futuro que podrían transcurrir en el país. Por ello, son fascinantes las dos advertencias que se hicieron sobre una posible evolución de los movimientos guerrilleros si estos no eran atendidos con seriedad. Tales advertencias no solo resultaron acertadas en los años que comprendía el documento (siete años), sino que vaticinaron casi proféticamente los siguientes 30 años del conflicto armado. Por ello, el EJC se refirió a los escenarios que podrían protagonizar los grupos guerrilleros a futuro:

Apéndice A. LA AMENAZA INTERNA EN EL FUTURO.

Si nos atenemos a lo que es en la actualidad la amenaza interna, a lo que ha sido en los últimos 20 años, a los procedimientos que emplea y a la filosofía en la cual se basa, podemos afirmar en el inmediato futuro.

LA SUBVERSIÓN TIENDE HACIA SU DESARROLLO

Y por lo tanto está en la capacidad de:

- A. Consolidar y fortalecer las actuales organizaciones subversivas
- B. Intensificar su lucha armada abriendo nuevos frentes en diferentes zonas del territorio Nacional aún no afectados, incluyendo áreas urbanas.
- C. Acentuar su acción directa contra el Gobierno y otras instituciones, a través de huelgas, paros, motines y asonadas y otras modalidades de lucha abierta.
- D. Ampliar su campo de acción infiltrando las instituciones que hasta la fecha se han sustraído a su influencia, entre las cuales las Fuerzas Militares ocupan el primer lugar.
- E. Continuar su acción disuasiva contra la sociedad y sus instituciones fundamentales para impedir que participen activamente en la Defensa o al menos lograr su indiferencia.
- F. En síntesis, la Subversión está en capacidad de ampliar el campo de sus actividades sin consideraciones de tiempo o espacio y empleando todo tipos de medios, acciones o personas y explotando toda circunstancia, condicione que le sea favorable.

EN EL FUTURO LA SUBVERSIÓN BUSCARÁ GENERALIZAR EL CONFLICTO.
(Ejército Nacional, *Plan de Desarrollo del Ejército 1973-1980*, p. 29. Archivo del Ministerio de Defensa)

Claramente, se ve que hay un estudio de la obra de Mao Tse-Tung para comprender el actuar y la estrategia de los grupos guerrilleros, ya que en el libro *Guerra de Guerrillas* (1937), el líder chino habla claramente de las fases y las estrategias que le dieron resultados positivos, y que podría inspirar a otros movimientos revolucionarios alrededor del mundo. Entre ellos está la *lucha popular prolongada*, la cual pretende unificar tanto los movimientos populares como las tácticas de la guerra de guerrillas para así derrotar al contrincante por medios políticos y militares. Esta eficaz articulación entre el factor insurgente y el trabajo en masas desemboca en una insurrección general que da el camino a una revolución exitosa. Sin embargo, cabe tener en cuenta que tal tipo de estrategias inequívocamente van a registrar actos de violencia.

Para finalizar e introducir la siguiente sección, es ineludible la última frase que nos deja este documento del Ejército: *en el futuro la subversión buscará generalizar el conflicto*. Puede decirse que eso ocurrió con la combinación de todas las formas de lucha, al integrar la política con las armas y al abrirse nuevos frentes de guerra, como los que hubo en Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño, por nombrar algunos casos. Así mismo, ampliaron su campo de actividades explotando las circunstancias que generó el narcotráfico, al ser un sustento indispensable para financiar los músculos políticos y militares que, no solo se limitaban a movimientos guerrilleros, sino que fueron de las principales motivaciones para la creación de ejércitos privados y autodefensas ilegales que surgieron décadas más tarde en el departamento de Antioquia. Sobre este fenómeno se profundizará más adelante.

Como se viene argumentando, los años ochenta del siglo XX representaron un giro radical para los movimientos guerrilleros en Colombia, por cuatro grandes motivos políticos y sociales tanto en el plano internacional como en el local. El primero fue la nueva ola de movimientos armados internacionales conocidos como “la nueva izquierda” estaba adquiriendo fuerza en Europa; organizaciones tales como Acción Directa (Francia), el Baader Meinhof (República Federal de Alemania), las Brigadas Rojas (Italia) y el Ejército Rojo (Japón), son solo algunos de los que resaltaron en esta época, por cuanto fueron una respuesta político-armada a la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Además, varios de esos movimientos se fortalecieron entre los decenios de 1970 y 1980, cuando se destacaban por atentar contra la infraestructura estatal en las grandes ciudades, así como por recurrir a los secuestros y a los asesinatos con fines vengativos, y por su radical ánimo antiestadounidense (Rapoport, 2004).

Segundo, la forma de operar de esas organizaciones se basaba en la de una guerrilla campesina cuyos impactos no eran notorios, o tardaban demasiado en producirse, debido a su enfoque rural, donde los principales centros de poder urbanos a duras penas sentían sus impactos. A medida que fueron pasando los años, se plantearon nuevas direcciones, estrategias y tácticas que fortalecerían al movimiento guerrillero popular y lo llevaron a obtener mayores resultados tanto políticos como militares en sus respectivos campos de batalla. Por eso, el Movimiento 19 de Abril (M-19), el cual seguía los ejes centrales del *Minimanual del Guerrillero Urbano* (1969), de Carlos Marighella, líder del grupo armado brasilero Acción Liberadora Nacional (ALN), enfocaron sus esfuerzos insurgentes en Bogotá, la ciudad capital, para acaparar la atención de un público urbano y producir impactos directos donde el poder de las instituciones estatales era más notorio.

En tercer lugar, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue capaz de sacar del gobierno a la familia Somoza, en su natal Nicaragua, y entonces los ánimos revolucionarios y la revitalizada posibilidad de tomarse el poder por las armas inspiraron no solo a las FARC-EP, sino a otros movimientos guerrilleros, para proseguir con la lucha armada como un mecanismo real para conquistar el poder central del Estado o mantener activos sus necesidades y sus beneficios en las regiones que históricamente ocupaban.

En cuarto lugar, la Unión Soviética venía exponiendo síntomas de debilidad, y su decadencia era cada vez más notoria para algunos movimientos armados que buscaban desesperadamente mantener los principios revolucionarios. Pero a finales de la década de 1980, la gran mayoría de los movimientos de ese corte habían iniciado procesos de negociación —o incluso, desmovilizaciones definitivas— para alcanzar acuerdos de paz dentro de sus respectivos Estados. No obstante, décadas atrás, la bonanza marimbera —es decir, el cultivo y el tráfico de marihuana desde Colombia— representaba unos altos índices de ingresos económicos. Ciertamente, el conflicto armado en Colombia iba a transformarse, a mutar y a volverse cada vez más intenso y violento.

El narcotráfico: el ascenso de las AUC y de las FARC-EP

En los años ochenta del siglo XX, las FARC-EP lograron consolidar su presencia en el territorio nacional con la creación de varios frentes en Caquetá, Cauca, Meta, el Magdalena Medio y el Urabá (Observatorio de la Consejería Presidencial para los

Derechos Humanos 2013, p. 153). Esto no es coincidencia, porque en 1982 se realizó la VII Conferencia Guerrillera, el cual es un documento esencial para comprender el futuro actuar de esa guerrilla: centrar toda su estrategia y sus formas de actuar en la toma del poder por las armas. Esto no resulta muy innovador, pues bien sabido era que el PCC se había propuesto la toma del poder mediante la combinación de las formas de lucha. Por otra parte, algunos de los intereses expansionistas de esta guerrilla pudieron percibirse como una tensión no solo en las redes locales establecidas en el Urabá, sino para otros movimientos guerrilleros ya establecidos en la región, como el EPL. No obstante, no fue esta expansión militar lo que disgustaba a otras organizaciones guerrilleras, sino, más bien, el interés que tenían las FARC-EP en explotar el narcotráfico para sus necesidades y en su beneficio.

Por ello, el V Frente pudo crecer y darles vida a los frentes 58, 18 y 47, que iniciarían sus operaciones en el Magdalena Medio y el suroeste de Antioquia. Adicionalmente, se fundó el Frente 34, que se asentaría en el Chocó septentrional, hacia los municipios de Atrato y Darién, donde terminarían por sumársele tres frentes: el 35, el 36 y el 37, hacia el nordeste de Antioquia. Este gran número de frentes desembocaría en la formación de una estructura militar jamás antes vista en un movimiento guerrillero en Colombia: la creación de los bloques. Para comprender la magnitud de este poderío militar tienen que hacerse las siguientes cuentas, dadas por los estatutos de la misma guerrilla: un frente de las FARC-EP significa la presencia de dos columnas; es decir, aproximadamente 200 guerrilleros (cada columna es de 110 guerrilleros) (FARC-EP, S. f., p. 8). Entonces, un bloque equivale a la presencia de cinco frentes o más, lo que puede ser un número cercano a más de 500 guerrilleros. En otras palabras, son más de 200 los guerrilleros que conforman dicha estructura. Así pues, las FARC-EP bautizaron el Bloque Noroccidental con el nombre de “José María Córdova”, y el cual fue penetrando e impactando a los grandes hacendados y empresarios de la zona por medio de extorsiones, secuestros y, simultáneamente, adelantando trabajo político en las comunidades.

En la misma década surgieron los primeros grandes carteles del narcotráfico, que se dedicaron a explotar la producción de la planta de coca para la producción del alcaloide de la cocaína. Esta forma de tráfico generó descomunales riquezas a las personas involucradas en dicho negocio ilícito. Curiosamente, en la X Conferencia Guerrillera, las FARC-EP establecieron que lucharían en contra del narcotráfico, porque fundaban “nuevas dinámicas económicas” y las riquezas que producía tal negocio permitían controlar a las masas (García, 2009, p. 168); una situación que se mostraba desventajosa para sus objetivos políticos, significaba una pérdida de seguidores; incluso, la de militantes que se sintieran atraídos hacia el narcotráfico.

Para evitar una mayor permeación de su masa crítica, las FARC-EP convencieron a los campesinos de cultivar coca para vendérsela a pequeños carteles, aunque el campesinado seguiría trabajando en la producción alimentaria para su propia subsistencia y la de los miembros de las FARC-EP. Sin embargo, lentamente, los ingresos producidos podrían crecer si esta guerrilla fuera capaz de controlar fases del proceso como el cultivo, los laboratorios y las rutas nacionales, ya que las internacionales estaban siendo controladas por otros grupos (Mackenzie, 2010, p. 3).

Igualmente, las FARC-EP querían dejar de ser una guerrilla rural que buscaba mantener soberanía sobre algunos territorios, y evolucionar a los siguientes niveles militares. Dentro de la lógica del líder Mao Tse-Tung, existen tres estados cruciales para un movimiento armado popular: 1) la *guerra de guerrillas*, o “la guerra de la pulga”, en la que se mantenían las emboscadas cerca de sus retaguardias estratégicas y se conservaba una estructura guerrillera; 2) la *guerra de movimientos*, cuando se daría el paso para convertirse en algo similar a un ejército regular cuando se intentase invadir y ocupar territorio enemigo; 3) la *guerra de posiciones*: el movimiento popular funciona y tiene capacidades similares a un ejército regular que puede mantener posiciones e intentar ocupar territorios desde ciudades o zonas rurales de donde fueron capaces de sacar la presencia del Estado. Por ello, en ese intento de evolución, las FARC-EP adoptaron en su nombre lo de “Ejército del Pueblo (EP)”, para iniciar esa transformación, aparentemente simbólica, pero cuyo desenlace se vio en tomas a poblaciones y en la destrucción de bases militares y puestos de policía a lo largo de la década de 1990.

También, pese a ser miembro fundacional de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB), con las demás guerrillas colombianas, las tensiones ideológicas y los modos de operar entre las distintas organizaciones armadas forjaron notorias tensiones entre ellas; una problemática que complicó, irónicamente, coordinar golpes o estrategias en conjunto. Más aun, la injerencia del narcotráfico y la posibilidad de emplearlo como un método de financiación produjo rupturas dentro de la coordinadora o, al menos, fuertes debates, de los que jamás se obtuvo un consenso general y positivo sobre tan espinoso tema. Por ello y otras motivaciones, el M-19, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), el Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) y el EPL terminaron por acogerse a las negociaciones de paz del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), y finalmente se desmovilizaron para el mandato de Cesar Gaviria (1990-1994).

Por otra parte, en el decenio de 1980, el resurgimiento de los grupos guerrilleros y el auge del narcotráfico hicieron que la violencia escalara en ciertas partes del país; por ejemplo, en departamentos como Antioquia y Córdoba. Los crecientes

actos delictivos del EPL y de las FARC-EP afectaron de manera considerable la vida de la población civil en zonas del departamento donde la presencia de los organismos del Estado era mínima o no había la protección suficiente para ese mismo actuar; tal situación permitía que se vulneraran aún más los derechos fundamentales de las personas. Así mismo, las inmensas riquezas que había producido un grupo de narcotraficantes, cuyo negocio inevitablemente iba a traer guerras o sucesos violentos entre las distintas organizaciones armadas que buscaban el control de la producción y las rutas del narcotráfico degeneraría en el aumento de hechos victimizantes como el desplazamiento, amenazas y homicidios. Esta combinación de factores sociales y políticos condujo a civiles de distintos grupos sociales (desde hacendados hasta campesinos) y a grupos de narcos a organizarse y alzarse en armas para defender su territorio y, por influencia de algunos carteles, a enriquecerse mediante las ganancias del destructivo negocio ilícito (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022b, p. 190). Surgieron como un grupo de sicarios financiados por el Cartel de Medellín, para asesinar a cualquier persona que se interpusiera en sus intereses o afectara a sus miembros. Este grupo se denominó Muerte a Secuestradores (MAS), creado tras el secuestro perpetrado por el M-19, de Martha Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa Restrepo, un ganadero que tenía afiliación con el narcotráfico. Así pues, el MAS se dedicó a buscar y asesinar a cualquier miembro de la guerrilla, así como a simpatizantes o partidos políticos apoyados por estas organizaciones armadas.

Tras la fragmentación de las relaciones entre el Cartel de Medellín y el de Cali, surgieron los Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES), quienes funcionaron como un brazo armado de los Rodríguez Orejuela. En este grupo se encontraban los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, quienes ya estaban vinculados a negocios ilícitos como el narcotráfico y el tráfico de esmeraldas y tenían una venganza pendiente con las FARC, tras el asesinato de Jesús Castaño, su padre, quien se había rehusado a seguir pagando las extorsiones de esa guerrilla. Para proteger sus riquezas, mantener sus intereses y sus beneficios propios y los de sus aliados y vengar la muerte de su padre, los Castaño Gil entrenaron y capacitaron militarmente a personas interesadas en su discurso antiguerrillero, en una finca en el Urabá llamada la Tanguera. Se desencadenó, entonces, una serie de amenazas, homicidios, masacres y otros de tipos de actos de victimización contra simpatizantes de grupos de izquierda y presuntos “guerrilleros” o “aliados” de dichos grupos. Fue así como nacieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y el Urabá (ACCU), que ahora no solo enfocarían sus esfuerzos exclusivamente en el Urabá y en el sur del Córdoba, sino que pasaron de ser una fuerza de mera autodefensa a un ejército

móvil que llegaba a distintos departamentos y terminó por perpetrar masacres, por ejemplo, en Santander, donde 19 personas fueron asesinadas por las ACCU en noviembre de 1987, en la población de Barrancabermeja y en el sur de Antioquia, en el municipio de Segovia. La información del Centro Nacional de Memoria Histórica (2014) data 46 personas masacradas y 60 heridas en noviembre de 1988 (p. 44), con el argumento de que las guerrillas y sus seguidores eran una amenaza para la comunidad.

Sin embargo, y dentro de una lógica de enriquecimiento ilícito propia de las guerras híbridas, Barrancabermeja es la principal fuente de petróleo del país y Segovia es reconocida por sus prósperas minas de oro. Así pues, teniendo este último municipio una tradición política ligada al PCC en Antioquia, por los conflictos patrón-trabajador, las ACCU, un ejército privado, no dudaron en acabar con un gran número de personas que buscaban expulsar a sus competidores y apropiarse, de alguna manera, de esos negocios. Tras la presunta muerte o desaparición de Fidel Castaño, su hermano Carlos Castaño intentó unificar todos los movimientos de autodefensa, antiguerrilleros y anticomunistas, en las que pasaron a ser conocidas como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 1997. Las AUC eran un poderoso ejército privado que empleaba el narcotráfico dentro de sus finanzas y, a pesar de ese crimen, aseguraban que su principal motivación política era defenderse de la avanzada guerrillera y de sus aliados ideológicos.

Pero, ¿cuál era el escenario del ELN para ese entonces? Ciertamente, a dicha guerrilla le habría encantado expandir sus propios intereses en el Urabá, pero siempre se ha encontrado con grandes desafíos tanto políticos como militares en esa región del país; incluso, Carlos Castaño le propuso al ELN la posibilidad de negociar directamente el cese de hostilidades con las AUC, debido al desgaste militar que producían esas hostilidades, el número de muertes y el sufrimiento provocado, pues querían resolver otros problemas, en vez de sostener combates contra la guerrilla elena (Revista *Semana*, 1998, citada por Cimadevilla, 2019, p. 200). Probablemente, para poder sobrevivir al notorio aumento en su poderío que tuvieron las FARC-EP y las AUC, así como a la reestructuración de las FF. MM., el ELN optó por mantener sus áreas tradicionales y repensar sus estrategias, sus tácticas y sus operaciones para el futuro. A pesar de plantearse un eje estratégico para los temas ambientales, el ELN no ha logrado penetrar con eficacia en la región del Urabá. Es decir, los poderes militares y criminales de las autodefensas y sus descendientes (especialmente, El Clan del Golfo), han resistido y evitado el ingreso de algún frente de esta guerrilla. Por lo tanto, la presencia del ELN en la región puede que se perciba, pero sigue siendo débil.

Solo décadas más adelante se avizoraría alguna presencia del ELN en la región: en un artículo de Verdad Abierta (2018), personas del municipio de Dabeiba reportaron la aparición de este grupo armado, que venía desde el departamento de Chocó, una zona donde han establecido su influencia y su poder militar. Sin embargo, la fuerte presencia de otros grupos descendientes de las AUC (sobre los cuales profundizaremos más adelante) ha logrado mantener a esta guerrilla lejos de consolidarse territorialmente en la región. Así, el ELN ha optado por enfocarse en sus áreas tradicionales, como Arauca y Norte de Santander, que, justamente, utilizan también como plataformas de entrada y salida a los estados federales de Amazonas, Táchira y Zulia, en el vecino país de Venezuela. Entonces, esta situación fronteriza le ha permitido al grupo eleno tanto sobrevivir —al emplearlo en calidad de ruta de escape— como, al mismo tiempo, un medio para expandir sus intereses a escala binacional.

Los hechos victimizantes en el Urabá

¿Qué impactos tuvieron los grupos armados en la región del Urabá ante la reestructuración de las guerrillas y la fundación de grupos de autodefensa (especialmente, las ACCU y las AUC) financiados por el narcotráfico? La estructuración de los tres grupos mencionados confluyó en un crecimiento en el número de sus integrantes armados. En consecuencia, era inevitable una ola de enfrentamientos e incursiones contra la población civil, que acreció de modo significativo varios hechos victimizantes en gran parte del país. Justamente, olas de personas provenientes del Urabá habían sido desplazadas forzosamente por grupos armados como las FARC-EP y las AUC, debido a los enfrentamientos, las amenazas o, peor aún, las masacres que se produjeron dentro de esta área y sus cercanías.

Ya desde finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo XX, los ejércitos privados financiados por el narcotráfico, como las ACCU, querían controlar las rutas del narcotráfico y expulsar a cualquier movimiento guerrillero de la región noroccidental de Antioquia. Para ello, las tácticas de intimidación no se basaban exclusivamente en amenazar, expulsar y despojar a miembros de fuerzas políticas de la izquierda (donde bien sabemos que estaban asentados), sino que recurrieron a los asesinatos colectivos, que se resumieron en las masacres de la vereda de Puerto Bello (Turbo), el 14 de enero de 1990; de Guatapurí y Romeral (Chigorodó), el 17 de marzo de 1990, y de Necoclí, el 22 de marzo de 1990¹. Estas

¹ Los datos fueron extraídos del medio de comunicación independiente y nativo digital Rutas del Conflicto.

masacres fueron perpetradas contra integrantes de partidos de izquierda y, al mismo tiempo, en nombre de hacer una forma de ajusticiamiento contra personas que, supuestamente, habían robado unas reses, como en el caso de Puerto Bello. En consecuencia, estas autodefensas ilegales también ejercían la justicia de forma brutal en contra de la población, violando los procedimientos regulares que son aplicados por una figura estatal encargada.

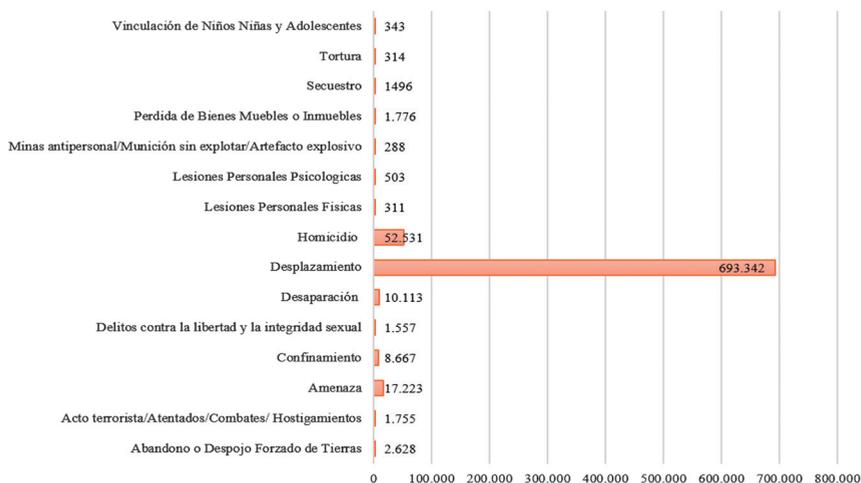
Por otra parte, la masacre más notoria producida por un grupo guerrillero ocurrió en 1994, en la Chinita (Apartadó), donde miembros del partido Esperanza Paz y Libertad (quienes eran desmovilizados del EPL) fueron asesinados por integrantes del V Frente de las FARC-EP y disidentes del EPL bajo el mando de Francisco Caraballo, quien consideró que el Gobierno nacional no estaba cumpliendo con lo pactado tras la desmovilización. La masacre fue perpetrada por distintas motivaciones: el PCC y la UP eran los partidos “tradicionales”, y el partido EPL había conseguido algunas alcaldías en la región, cosa que afectó el poder real del que hablaba Bernardo Jaramillo, y la desmovilización del EPL fue percibida como traición por parte de las FARC-EP. Ante este terrible acto, algunos de los militantes del partido político afectado decidieron armarse para enfrentar el azote de quienes otrora fueron sus aliados. De esta manera, se crearon los Comandos Populares: un nuevo grupo armado que buscaba defender sus territorios en Turbo, Carepa y Apartadó, y trabajar como campesinos y como guardias de ciertas fincas. Ante este interés en enfrentarse a los movimientos guerrilleros, las ACCU buscaron crear una “alianza”. Poco a poco, fueron absorbidos por el creciente poderío de las autodefensas ilegales de los Castaño Gil y desapareciendo como un grupo armado independiente hacia 1995, año en que empezó a darse forma al Bloque Bananero, con ayuda del grupo autodefensa de Los Escorpiones, liderado por José Everth Veloza García, más conocido como alias H. H.

¿Fue la violencia política la única causa de este aumento en la región? Esta combinación de actores, cuyos propósitos habían superado el nivel político y ahora se dedicarían a luchar por el control del territorio y el de las rutas del narcotráfico, trajo consecuencias nefastas para los urabeños. Así pues, el aumento de estas acciones violentas se debió al interés geopolítico y geoestratégico que posee la región para el narcotráfico y el tráfico de armas en el desarrollo del conflicto armado colombiano. La causa detrás de estas operaciones es sencilla: se trata de la única zona en América del Sur que conecta por tierra a los océanos Pacífico y Atlántico, lo que brinda dos vías marítimas hacia los dos cuerpos de agua salada más grandes del planeta. Así pues, las conexiones a Estados Unidos se ampliaban a todas sus áreas costeras para el tráfico de estupefacientes, y *dos* salidas oceánicas daban a cualquier grupo armado capacidades globales para extender sus intereses a

otros continentes. En consecuencia, el funcionamiento de exportaciones e importaciones de materiales, equipos o cualquier producto rentable dentro del portafolio criminal internacional podría crecer significativamente tanto en Colombia como en otros países. De esta manera, el grupo que tuviese el control territorial del Urabá tendría a su disposición gran parte de la economía criminal que sale y entra del país, cosa que todo grupo armado involucrado en mercados ilegales se disputaría con el objetivo de mantener su músculo político-militar funcionando y robusteciéndose en un corto plazo.

Según cifras otorgadas por la Red de Unidad de Víctimas (RUV), como se muestra en la figura 2, el desplazamiento forzado, los homicidios, la desaparición forzada, el confinamiento, los secuestros, las amenazas y el despojo de las tierras crecieron de manera alarmante, lo cual muestra cómo las confrontaciones entre las FARC-EP, las AUC y las FF. MM. se habían intensificado drásticamente. Además, las investigaciones del profesor Jaramillo (2007) indicaron que entre 1995 y 2006 se calcularon 107.317 personas desplazadas tan solo en el departamento de Antioquia; sobre todo, en la región del Urabá (p. 106). Lo curioso es que la RUV indica que, solo para 1997, fueron desplazadas 122.935 personas. Aquí se nos presenta una dificultad cuantitativa, en el que es difícil establecer con exactitud el número de desplazados; pero sí podemos indicar que hubo una tendencia al alza en la violencia que azotaba a la región del Urabá tras la consolidación territorial de las AUC y el interés de las FARC-EP en conquistar el nororiente antioqueño entre 1995 y 2006.

Figura 2. Principales hechos de violencia en el Urabá (1986-2019)



Fuente: Base de Datos de la RUV (Gobierno de Colombia, s.f.).

Así mismo, podemos apreciar una conexión geográfica entre los principales municipios afectados en esta época: Apartadó, Chigorodó, Carepa, Dabeiba, Mutatá y Turbo son municipios que conectan al Urabá con los dos océanos (Pacífico y Atlántico), el río Atrato y el Parque Natural Nudo de Paramillo eran claves para las rutas del narcotráfico y otros tipos de mercados ilegales (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022a, p. 305). Este corredor estratégico y la ubicación del Bloque Noroccidental de las FARC-EP, el Bloque Bananero de las ACCU y, posteriormente, el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC produjeron crueles enfrentamientos donde los principales afectados fueron la población civil y las comunidades nativas, las cuales eran a veces acusadas de amistar con las guerrillas, o bien, de ser seguidoras o infiltradas por las autodefensas ilegales. No es extraño que, precisamente, entre Dabeiba y Mutatá se encuentre el cañón de la Llorona, lugar donde, desgraciadamente, tuvieron lugar feroces batallas campales entre estos dos grupos y las FF. MM. a lo largo de toda una década, y donde militares, guerrilleros y miembros de las AUC perdieron la vida o sufrieron lesiones irreparables en sus cuerpos. Así mismo, entre 1995 y 2005 ambos grupos ilegales perpetraron varias masacres en distintas veredas de estos municipios, por diversos motivos: desde retaliaciones y venganzas hasta actos de intimidación contra personas que tenían supuestos nexos o eran infiltrados de alguno de esos grupos.

Además, hubo otro hecho victimizante que causó fuertes tensiones entre la población, y cuyos impactos trajeron fuertes consecuencias para el desarrollo humano de la región: el reclutamiento ilícito de menores. Ahora bien, se puede entender cómo reclutaban o llegaban voluntarios menores de edad dependiendo del control territorial ejercido por cada grupo en regiones específicas. Por ello, no es de extrañarse que en los estudios presentados por el CNMH (2017) se muestre cómo entre las 20 regiones con mayor reclutamiento infantil entre 1997 y 2005, el Urabá ocupe el cuarto lugar, con más de 300 casos reportados (p. 123). Además, en el mismo informe, se indica que las AUC reclutaron más menores de edad (sin importar el género) en la región del Urabá que las FARC-EP durante el lapso mencionado; fue área del país la cuarta en cuanto a preferencia de las AUC, tras el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio; el primer lugar lo ocupaba el piedemonte llanero (p. 129). Por lo tanto, estos hechos de reclutamiento ilícito de menores de edad ocurrían según el grado de control de un grupo armado, el cual podría ser o una zona donde tradicionalmente operaban o cerca a sus áreas de retaguardia estratégica, donde se encontraban sus principales campamentos.

Durante los años noventa del siglo XX, las FF. MM. recibieron fuertes golpes tácticos y operacionales, como el ataque a la base de Las Delicias (1996), Miraflores

(1998), El Billar (1998) y la toma de Mitú (1998); este último, hecho histórico, al ser la primera capital departamental (la de Vaupés) en ser asediada completamente por un grupo guerrillero y ser retenida durante horas por las FARC-EP, en su medio de su guerra de movimientos. Además, el ELN había producido grandes impactos a la población civil, como el secuestro del Vuelo 9463 de Avianca, la toma de la Iglesia de la María, en Cali (1999), y la masacre de Machuca, en Segovia, Antioquia (1999). Finalmente, las AUC mantenían un régimen basado en la intimidación y la violencia perpetrada tanto en sus áreas tradicionales como en otros lugares del país en los que demostraron claros intereses en expandir su influencia, sus intereses y sus beneficios.

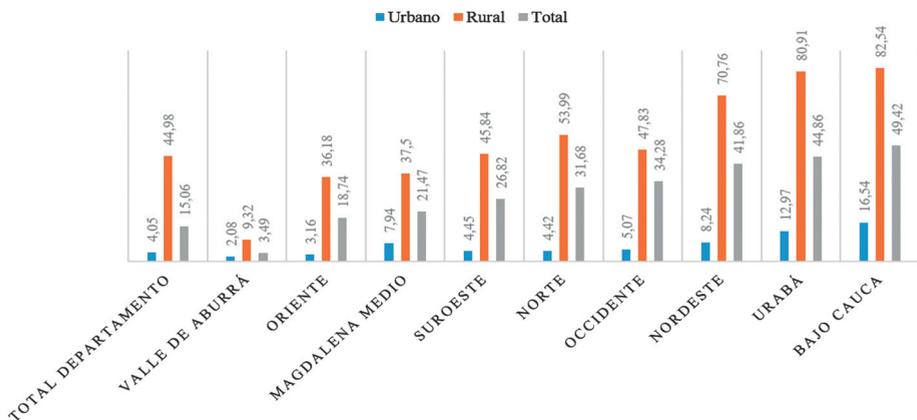
Ante la situación descrita, las FF. MM. iniciaron un proceso de reestructuración estratégica, táctica y operativa que se adaptaría a los cambios y los desafíos derivados de estos grupos. No solo se modernizaron los equipos y las armas —gracias, en parte, al pacto político-militar entre Estados Unidos y Colombia llamado Plan Colombia (2000)— para contrarrestar militarmente al narcotráfico, sino que, además, cambiaron la esencia misma del soldado y su forma de pensar para poder afrontar estos desafíos. Entre 1998 y 2002 se crearon diferentes estructuras que serían fundamentales para detener la avanzada de los grupos guerrilleros y de autodefensa, tales como los primeros batallones como los de Alta Montaña, la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) y la Brigada Contra el Narcotráfico, por nombrar algunas. Así mismo, se emplearon soldados profesionales, en vez de los llamados soldados regulares, y se reestructuró la forma como venía trabajando el arma de Inteligencia, con el objetivo de modernizarse y analizar las problemáticas desde otra óptica. Ya para 2002, cuando la violencia seguía aumentando en todo el país, el Comando General de las Fuerzas Militares activó el Plan Patriota, cuya misión era detener a los tres principales grupos de esa época, por medio de operaciones conjuntas entre las Fuerzas. En el plano militar, los índices de violencia entre 2003 y 2008 se redujeron, ya que las operaciones sostenidas en varias regiones del país debilitaron el avance de las FARC-EP y las operaciones del ELN, y llevaron a un proceso de diálogo y desarme a las AUC (Pizarro, 2018).

La nueva generación de organizaciones armadas

No obstante haber debilitado a las FARC-EP y al ELN y haberse generado un proceso de desmovilización en las AUC, los grandes problemas estructurales continuaban azotando la región. En la figura 3 se muestra cómo estaban las necesidades básicas

insatisfechas en el departamento de Antioquia, y cabe resaltar que el Urabá y el bajo Cauca registraron los índices más altos en tal sentido; específicamente, en las áreas rurales. Aunque las cifras sean de 2014, nos muestran que, a pesar de la posterior desmovilización de las autodefensas, en 2006, y los golpes infligidos a las FARC-EP en la primera década del milenio, las problemáticas estructurales han persistido de manera en extremo alarmante. Además, estas dos regiones han sumado, a lo largo de la historia, varios hechos victimizantes a gran escala. La figura 4 muestra cómo se redujo de manera significativa el número de acciones violentas en la región del Urabá con el proceso diálogos de la Zona de Distensión entre las FARC-EP y el gabinete del presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002), y cayó bastante después de la aplicación del Plan Patriota (2003-2007), con el adelanto de operaciones sostenidas en la retaguardia de las FARC-EP, el debilitamiento del ELN en algunas de sus áreas estratégicas y el de las AUC. Por lo tanto, la situación nos demuestra, en parte, cómo logró recuperarse en gran medida el control militar del territorio, pero la consolidación por parte de las demás instituciones del Estado no ha logrado enraizarse dentro de los corredores tradicionales e históricos de la violencia, cosa que en términos de causas estructurales (un sistema económico que causa desigualdad social y la ineficacia de ciertas instituciones del Estado en territorios donde se presentaban altos índices de violencia, por ejemplo) genera no pocos inconvenientes a la hora de reducir varios de los problemas estructurales socioeconómicos.

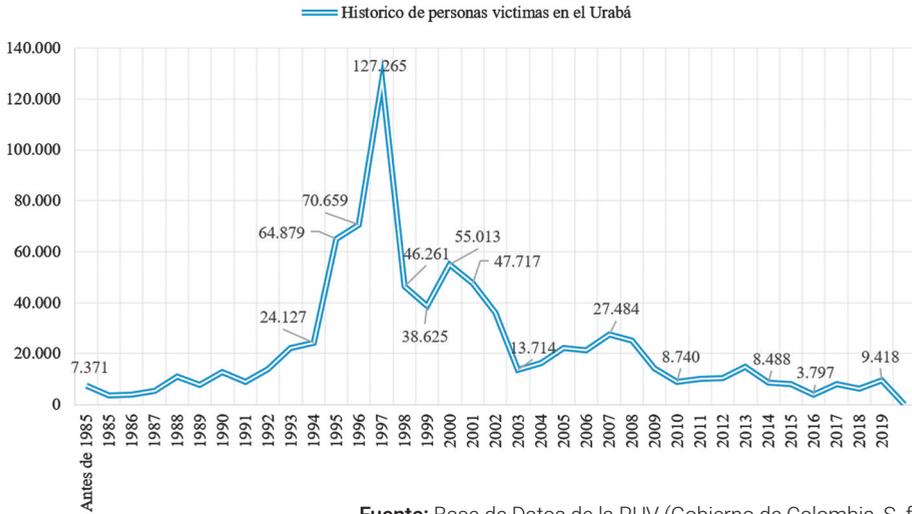
Figura 3. Necesidades básicas insatisfechas (NBI) por total, cabecera y resto



Nota: encuesta expandida con proyecciones demográficas DANE. Muestra calculada para el resto del departamento con un margen de error del 4 % y una confiabilidad del 95 % territorio (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019, p. 10).

Fuente: Gobernación de Antioquia. Encuesta de Calidad de Vida (2014).

Figura 4. Histórico de personas víctimas en el Urabá



Fuente: Base de Datos de la RUV (Gobierno de Colombia, S. f.).

A pesar de la estrepitosa caída que tuvieron las distintas organizaciones armadas en distintas regiones del país, la violencia y el surgimiento de grupos remanentes se hacía notar en distintas partes. ¿Por qué se mantuvo este tipo de violencia tras la desmovilización de las AUC y los fuertes golpes infligidos a las FARC-EP? Para responder a esta pregunta, podemos plantearnos la siguiente hipótesis: la creación de disidencias llevó a una continuidad del poder local que, en pocas palabras, conserva las alianzas ilegales de distintos tipos de actividades ilícitas y mantienen al margen la presencia institucional efectiva. En el caso colombiano, durante el periodo estudiado, las negociaciones de Santa Fe de Ralito (2006) suponían la total desarticulación de las AUC, que sus altos mandos terminarían pagando prisión en Estados Unidos por el crimen de narcotráfico y que sus bases serían reintegradas a la población civil, pero solo aquellos que no habían cometido crímenes de lesa humanidad ni habían ingresado en el negocio del narcotráfico. Sin embargo, los términos de la Ley 975 del 25 de julio de 2005, conocida como “Justicia y Paz”, y que buscaba la transición de los miembros de las AUC a la vida civil, no tuvieron el impacto esperado con los mandos medios; es decir, los mismos que organizaban las operaciones ilegales como secuestros, homicidios y ejercicio del control directo sobre los cultivos ilícitos y los territorios aptos para la minería ilegal. En consecuencia, varios de esos mandos medios se posicionaron como líderes de organizaciones armadas que buscan el control del territorio y, en algunos casos, intentan esconderse tras un supuesto discurso político para justificar sus

acciones. Entonces, de la fragmentación de estos grupos, surgieron nuevas organizaciones que se disputarían el control del territorio para seguir con sus métodos de enriquecimiento ilícito (CNMH, 2012; Gama, 2017; McDermott, 2014).

Por ello, a pesar de que se ha visto una reducción notoria de los índices de violencia, la zona del Urabá (entre otras del país) sigue siendo explotada con fines ilegales o territoriales que, trágicamente, no generan los cambios radicales necesarios para el bien de la población civil, la fauna y la flora locales. Tras la finalización de algunos conflictos armados o tras acuerdos políticos entre los distintos bandos, algunos grupos del bando “derrotado” pueden no estar de acuerdo con lo pactado, o bien, no se han cumplido a cabalidad los pactos que, supuestamente, deberían terminar con la violencia. Por ello, la aparición de grupos disidentes conduciría a una prolongación de las hostilidades y a una nueva generación de violentas discordias entre diversas etnias, clases sociales, grupos políticos o grupos criminales.

De las desmovilizadas AUC quedó un número de bloques que optaron por mantener las armas, debido a supuestos alegatos políticos (como el Bloque Metro, que actuaba principalmente en el noroeste antioqueño) o citaban ese argumento para esconder sus verdaderas intenciones: seguir con el negocio del narcotráfico y explorar distintos negocios ilícitos. Así pues, hubo una fragmentación y una mutación de varios de estos bloques o grupos relacionados con las autodefensas, y que terminaron adoptando nombres como Los Rastrojos o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Esta última organización es de interés para el presente capítulo, ya que las AGC actúan sobre la región del Urabá y fueron las más organizadas en cuanto estructura armada se refiere, al mantener parte de su estructura militar de una forma equiparable a la que tenían en las AUC. No obstante, el Estado colombiano no reconoció a ninguno de dichos grupos como organizaciones armadas con una beligerancia política, y terminó por conceptualizarlas como Bandas Criminales (BACRIM). Por ello, la nueva generación de GAO prioriza el control del territorio para explotarlo económicamente y relega a un segundo plano el objetivo político. Representantes de esta nueva generación incluyen a grupos como El Clan del Golfo y Los Pelusos, quienes intentan justificar su accionar criminal tras las banderas de las extintas AUC y del también disuelto EPL, respectivamente.

Estos GAO decidieron expandir sus intereses y sus riquezas al ampliar el portafolio criminal más allá del narcotráfico: se ha notado un incremento en la minería ilegal en los departamentos de Antioquia y Chocó o, para ser más precisos, en la región del Urabá. Por ello, varios GAO han disputado y ocupado el territorio para la explotación de estos minerales, a fin de saciar sus necesidades y sus beneficios

militares y económicos. ¿Cuál es el GAO que se ha especializado y dominado por más tiempo la minería ilícita en la región del Urabá? La respuesta es El Clan del Golfo, el cual ha sido responsable de las mayores cifras de deforestación, compra y uso clandestino de maquinaria amarilla y contaminación indiscriminada de las fuentes hídricas, al verter en ellas, entre otras, sustancias extremadamente nocivas, como la gasolina o el mercurio.

En 2018, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) computó que 17.766 hectáreas de bosque y selva habían sido deforestadas en los departamentos de Antioquia y Chocó (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018, p. 10). Aparte de la minería ilegal, maderas como ceibas y cedros son codiciadas en los mercados tanto nacionales como internacionales, al igual que un gran número de aves exóticas, las cuales están siendo traficadas por organizaciones criminales con el fin de lucrarse (Van Uhm, 2020). En consecuencia, estas acciones erosionan el territorio y contaminan una región que es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar, no solo de los colombianos, sino de gran parte del ecosistema planetario, ya que United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) declaró el Parque de los Katíos (el cual se encuentra en el Urabá) como Patrimonio Natural Mundial Vital para Sudamérica y Centroamérica.

Conclusiones

El conflicto armado en Colombia es un fenómeno transgeneracional por su larga duración, y multidimensional, por la cantidad de problemas políticos y estructurales derivados de él, y que persisten y se adaptan a los cambios tanto nacionales como internacionales que vive Colombia. Por tal motivo, a pesar de la extinción de algunos grupos armados y el cambio del panorama político, no pocos grupos disidentes dedicados a un número de actividades ilegales sigue trabajando en la clandestinidad, y enriqueciéndose tanto con negocios que se han vuelto tradición como ampliando el portafolio criminal a distintas áreas de enriquecimiento ilícito, como la minería, el tráfico de fauna y flora, de migrantes y de armas, por solo mencionar los más evidentes.

En Colombia se sigue utilizando una economía extractivista y explotadora del medio ambiente como principal método de enriquecimiento ilícito por parte de los actuales grupos armados. Esto deriva, necesariamente, en una continuación de la violencia por el control de los territorios con grandes riquezas minerales o para

el cultivo de la coca con fines prohibidos por las leyes nacionales e internacionales. Por lo tanto, es necesario generar una reflexión histórica que tenga, conjuntamente, una clara visión hacia el futuro de la resolución de las problemáticas tanto estructurales como políticas. Por ello, se puede decir que existe un control militar del territorio, pero no un control institucional de este, se ha carecido de algunas estructuras clave del Estado en áreas tradicionalmente violentas del país, como lo ha sido el Urabá.

Finalmente, son sobremanera preocupantes los índices de contaminación, deforestación y erosión del suelo que debe afrontar esta región, vital para el ecosistema global. Agresiones perpetradas por los GAO que buscan mantener el conflicto y la ilegalidad, porque son sus principales fuentes de ingreso. A ello se suman acciones irregulares por parte de minas artesanales hechas por los habitantes de la zona, o incluso, por algunas multinacionales que no han respetado algunos acuerdos tanto nacionales como internacionales, que buscan que el medio ambiente no se vea degradado con tanta rapidez.

Referencias

- Andrade, S. (2012). *Impactos del conflicto político militar en la vida cotidiana del municipio del Líbano Tolima entre 1991 y 2007* [Tesis de Maestría]. Universidad del Tolima, Ibagué.
- Bauer, A. (2014). Hybridization of Conflicts. *PRISM*, 4(4), 57-66. www.jstor.org/stable/26549752
- Bautista, F. J. (2018). Violencia híbrida: una ilustración del concepto para el caso de Colombia. *Revista de Cultura de paz*, 2, 295-321.
- Bejarano, A. M. (1988). La violencia regional y sus protagonistas: el caso de Urabá. *Análisis Político*, (4), 43-54.
- Bernal, G., Montoya, L. J., Garizábal, C., & Toro, M. (2005). La complejidad de la dimensión física en la problemática costera del golfo de Urabá, Colombia. *Gestión y Ambiente*, 8(1), 123-135.
- Buhaug, H., Scott, G., & Päivi, L. (2009). Geography, rebel capability, and the duration of civil conflicto. *Journal of Conflict Resolution*, 53(4), 544-569.
- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2019). *Perfiles Socioeconómicos de las subregiones de Antioquia*. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
- Carreño, J. P. (2011). La construcción de la memoria de un lugar en la prensa. Urabá en la Revista Semana (1980-2002). *Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación*, 9(18), 185-199.
- Carrillo-Bonilla, L. M., Trujillo, J. J., Álvarez-Salas, L., & Vélez-Bernal, I. D. (2014). Estudio de los conocimientos, actitudes y prácticas de la leishmaniasis: evidencias del olvido estatal en el Darién Colombiano. *Cadernos de Saúde Pública*, 30(10), 2134-2144. <https://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00139713>
- Celis Arroyave, J. (2009). *Historia general de Urrao*. Bogotá.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2012). *Justicia y Paz ¿Verdad Judicial o Verdad Histórica?* CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). *Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia, 1982 - 1997*. Segunda edición. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). *Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano*. CNMH.
- Cimadevilla, J. (2019). *De viejas cicatrices a nuevas heridas*. Editorial Planeta.
- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2022a). *Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia*. <https://www.comisiondelaverdad.co/no-mataras>.

- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2022b). *Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: Hallazgos y Recomendaciones de La Comisión de La Verdad de Colombia. Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia*. <https://tinyurl.com/2cy5t4eu>
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2016). *Dividendos Ambientales de la Paz. Oportunidades para construir una paz sostenible*. <https://tinyurl.com/bdfhevkh>
- Ejército Nacional. *Plan de Desarrollo del Ejército 1973-1980*. Archivo del Ministerio de Defensa, carpeta 06-000329, caja 06-000025.
- Faivre, H., & D’Arcier, F. (2005). Del Plan Colombia al Plan Patriota: Impacto del conflicto armado colombiano en el Ecuador, análisis de una estrategia de seguridad subregional. *Revista Complutense de Historia de América*, 31, 215-230.
- FARC. (2018). *Génesis. Documentos Rectores Farc-Ep*. Tomo XVIII, Documentos Bloque Oriental.
- FARC-EP. (S. f.). *Estatuto FARC-EP*. <https://www.farc-ep.co/pdf/Estatutos.pdf>.
- Fleming, B. P. (2011). *The hybrid threat concept: Contemporary war, military planning and the advent of unrestricted operational art*. U.S. Army School of Advanced Military Studies (SAMS), U.S. Army Command & General Staff College.
- Gama, G. D. R. (2017). Del paramilitarismo a las bandas criminales (BACRIM) en Colombia: causalidad económica. *REIB: Revista Electrónica Iberoamericana*, 11(1), 101-113.
- García, G. N. P. (2009). Las FARC, su origen y evolución. *Revista UNISCI*, (19), 154-184.
- Garzón Vergara, J. (2015). *Fragmentación y el cambiante rostro del crimen organizado en Latinoamérica*. Insight Crime. <https://tinyurl.com/55t4yt6b>
- Gobierno de Colombia. (s.f.). *Red Nacional de Información (RNI) y Red de Unidad de Víctimas (RUV)*. <https://tinyurl.com/2x3whj5f>
- Guhl Nannetti, E. (1992). *Visión histórica, económica, sociogeográfica y política: los territorios estatales periféricos y su desarrollo: el caso de Urabá. Colonización del bosque húmedo tropical*. Corporación Araracuara.
- Harnecker, M. (1989). *Entrevista con la nueva izquierda*. Centro de Documentación y Ediciones Latinas.
- Hoffman, F. (2007). *Conflict in the 21st century: The rise of hybrid war*. Potomac Institute for Policy Studies.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2018). *Resultados de deforestación*. <https://tinyurl.com/42eaybpx>
- Jaramillo, A. M. (2007). La experiencia del desplazamiento forzado en Urabá y el oriente antioqueño (1998-2006). *Revista Controversia*, 189, 147-171. <https://tinyurl.com/yfrkwvv9>
- Kaldor, M. (2013). In defense of new wars. *Stability: International Journal of Security and Development*, 2(1).

- Le Billon, P. (2008). Diamond wars? Conflict diamonds and geographies of resource wars. *Annals of the Association of American Geographers*, 98(2), 345-372.
- Londoño, J. C. C. (2019). El escenario del posacuerdo y sus incidencias en la transformación de las estrategias de defensa y seguridad del Estado Colombiano. *Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico*, 13(1), 167-183.
- Mackenzie, E. (2010). FARC y las Bacrim: un frente común. Grupo de Estudios Estratégicos GEES. *Análisis*, (7814). <https://tinyurl.com/bdfnu95b>
- Mazzoldi, G., Huertas, R., Cuesta, I., & Tobo, P. (2019). *Territorio, seguridad y violencias basadas en género en Apartadó*. Fundación Ideas para la Paz (FIP). <https://tinyurl.com/mtdjeu6w>
- McDermott, J. (2014). *El rostro cambiante del crimen organizado colombiano*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Münkler, H. (2005). *Viejas y nuevas guerras: asimetría y privatización de la violencia*. Siglo XXI de España Editores.
- Niño González, C. (2017). Breve historia del conflicto armado en Colombia. *Revista de Paz y Conflictos*, 10(1), 327-330.
- Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. (2013). *Atlas del impacto regional del conflicto armado en Colombia. Dinámicas locales y regionales del conflicto armado interno entre 1990*. <https://tinyurl.com/yckcc848>
- Orogun, P. (2004). "Blood diamonds" and Africa's armed conflicts in the post-cold war era. *World Affairs*, 166(3), 151-161.
- Pérez, G. (2007). *El Caribe antioqueño: entre los retos de la geografía y el espíritu paisa*. Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER)-Cartagena. Banco de la República. <https://tinyurl.com/k2uputed>
- Pizarro, E. (2018). *De la guerra a la paz. Las Fuerzas Militares entre 1996 y 2018*. Planeta.
- Porras, S. A. (2005). Conflicto y cultura: Impactos del conflicto político militar en la vida cotidiana del municipio del Líbano, Tolima, entre 1991 y 2007 [Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura]. Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias Humanas y Artes.
- Rapoport, D. C. (2004). The four waves of modern terrorism. En *Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy* (p, 54, 3-11). Georgetown University Press 2004.
- Revelo Rebolledo, J. E. & García Villegas, M. (Eds.). (2018). *El Estado en la periferia: Historias locales de debilidad institucional*. Dejusticia.
- Uribe de Hincapié, M. T. (1992). *Urabá: ¿región o territorio?: un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad*. CORPOURABÁ e INER.
- Van Uhm, D. R. D. P. (2020). *Crimen organizado ambiental en el Parque Nacional Los Katíos*. Willem Pompe Institute. Universidad de Utrecht.
- Vásquez, T. (2008). Las nuevas guerras y el conflicto armado en Colombia. *Controversia*, (190).
- Verdad Abierta. (2018). ¿Frente de Guerra Occidental del ELN se expande hacia Antioquia? <https://tinyurl.com/4x4tc47f>
- Wlaschütz, C. (2004). New wars and their consequences for human security case study: Colombia. *Human Security Perspectives*, 1(2), 15-23.